



MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA



SUBSECRETARÍA

El 29 de noviembre de 2023 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la solicitud de acceso a la información pública registrada con el número de expediente 00001-00084332, formulada por [REDACTED] al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo tenor es el siguiente:

"En base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicito información sobre la vivienda oficial de la que dispone el titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a saber: 1) Ubicación 2) Metros cuadrados 3) número de estancias y habitaciones"

Dicha solicitud se ha recibido en esta Subsecretaría de Economía, Comercio y Empresa, órgano competente para resolver, el 30 de noviembre de 2023, fecha a partir de la cual comienza el plazo para dictar resolución, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Una vez analizada la solicitud, esta Subsecretaría resuelve **conceder el acceso parcial a la información** solicitada.

En la actualidad, la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Comercio y Empresa tiene asignado el uso de un inmueble de dominio público de los previstos en el artículo 5.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La vivienda consta de 244 metros útiles distribuidos en 12 estancias, de las cuales cuatro son dormitorios.

En cuanto a la información relativa a la ubicación de la vivienda, según se señala en el Criterio Interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la aplicación de los límites establecidos en el artículo 14 de la Ley, esto es, *"la invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. En este sentido, su aplicación no será en ningún caso automática; antes al contrario, deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. El perjuicio invocado, además no podrá afectar o ser relevante para todo un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público)"*.

Con respecto al denominado *test del daño*, esta Subsecretaría considera que la difusión pública de la ubicación de la vivienda que, por más que se trate de una vivienda oficial, constituye el domicilio privado de un miembro del Gobierno de España, puede suponer un riesgo para el dispositivo de seguridad establecido para su protección. Con respecto al denominado *test del interés público*, esta Subsecretaría no aprecia la concurrencia de un interés público en la información solicitada que pueda justificar la asunción de este eventual perjuicio.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha analizado estos supuestos en reiteradas resoluciones a reclamaciones interpuestas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, de entre las que merece la pena traer a colación, por la similitud en el objeto de la solicitud con la analizada en la presente resolución de acceso a la información, las Resoluciones 829/2023, de 12 de julio, 117/2021, de 2 de junio, 118/2021, de 3 de junio, y 98/2021, de 31 de mayo. En el fundamento jurídico tercero de esta última se argumenta que *"el acceso y la eventual divulgación del dato relativo a la ubicación, más allá de la referencia genérica al municipio en el que se encuentra, comportan indudablemente un riesgo para la seguridad y la integridad personal del afectado, bienes y derechos que, salvo circunstancias muy excepcionales, prevalecerán frente al escaso peso del interés público en conocer su concreto emplazamiento."*

Por lo tanto, sobre la base de los análisis anteriormente mencionados, esta Subsecretaría concluye que, en virtud del artículo 14.1.a), procede limitar el derecho de acceso a la información sobre la ubicación de la vivienda de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Comercio y Empresa dado que la concesión del acceso a la misma supondría un perjuicio para la seguridad nacional. Así, considera que se debe limitar este acceso a informar de que dicha vivienda se encuentra en el término municipal de Madrid.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, de forma previa y potestativa, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

LA SUBSECRETARIA

